

Quito, Distrito Metropolitano, 27 de mayo de 2026
Oficio No. TPHC-CT-CCD-060

Señores

COMISIÓN DISCIPLINARIA

Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito

Con copia a:

- Presidencia del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ
- Secretaría Ejecutiva encargada
- Defensoría del Pueblo – Delegación Provincial de Pichincha

Asunto: Presentación de audio y solicitud de análisis de posibles conductas contrarias al Código de Conducta y Régimen Disciplinario

De mi consideración:

La Lic. Thanya Patricia Herrera Cortés, Consejera Principal ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en representación del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad, pone en conocimiento de esta Comisión los siguientes hechos:

Se adjunta a la presente el enlace digital y la transcripción textual de un audio correspondiente a una conversación telefónica sostenida entre la señora María Verónica Cevallos y el señor Gonzalo Velasco, realizada mediante altavoz o manos libres.

Según la información recibida, la señora Ángela Guinla se encontraba presente al momento de dicha conversación y, al escuchar referencias directas hacia su persona y hacia la suscrita, junto con expresiones que consideró ofensivas, descalificatorias y atentatorias contra la honra y dignidad, procedió a registrar parcialmente el contenido de la misma, para posteriormente ponerlo en conocimiento de la suscrita, con la finalidad de defenderse de los señalamientos realizados en su contra y en contra de la suscrita.

Cabe señalar que, durante los meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 2025, ya se habrían puesto en conocimiento de este Consejo hechos relacionados con estas situaciones; sin embargo, llama particularmente la atención que expresiones y actuaciones de esta naturaleza, que no solo involucran a la señora Ángela Guinla y a la suscrita, sino también referencias y señalamientos respecto de otros integrantes y dinámicas internas del Consejo de Protección de Derechos, no hayan recibido hasta la presente fecha un tratamiento institucional integral acorde con la gravedad de su contenido y con los principios de respeto, convivencia institucional y protección de la dignidad humana que deben regir dentro del Sistema de Protección de Derechos.

En el referido audio se evidencian múltiples expresiones dirigidas hacia la suscrita, mediante las cuales se realizan descalificaciones personales, cuestionamientos sobre mi actuación dentro del Consejo, referencias ofensivas y afirmaciones carentes de sustento verificable,

Consejo de Protección de Derechos
del Distrito Metropolitano de Quito



RECIBIDO

FECHA: 27-05-2026

HORA: 11:35

FIRMA: Elana P.

excediendo ampliamente los límites del debate institucional y del respeto que debe prevalecer dentro de espacios de representación y participación de derechos.

De manera reiterada, en el audio se hace referencia a mi nombre y a mi actuación institucional mediante afirmaciones subjetivas y señalamientos que podrían afectar mi buen nombre, honra, dignidad, reputación, credibilidad y ejercicio de representación dentro del Consejo de Protección de Derechos del DMQ, particularmente en el contexto de la defensa de derechos de personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria.

Asimismo, corresponde señalar que varias de las afirmaciones realizadas en el referido audio hacen referencia a supuestos enfrentamientos personales, conductas atribuidas a la suscrita y presuntas actuaciones impropias dentro del ejercicio de mis funciones, respecto de las cuales rechazo categóricamente su veracidad, por tratarse de afirmaciones falsas, carentes de sustento objetivo y que no corresponden a hechos ciertos ni individualizados.

Las referencias efectuadas en el audio no describen hechos concretos debidamente determinados, sino apreciaciones subjetivas, descalificaciones personales y afirmaciones generales carentes de objetividad, utilizadas para construir una narrativa negativa respecto de mi persona y de mi actuación institucional.

En particular, las afirmaciones relacionadas con supuestas actuaciones de "violencia política", campañas de desprestigio, generación de "hate", ataques personales o conductas irregulares atribuidas a la suscrita son rechazadas categóricamente por no corresponder a la verdad y por carecer de sustento objetivo. En consecuencia, corresponde que dichas afirmaciones sean debidamente aclaradas y sustentadas mediante elementos concretos, evitando que expresiones generales o acusaciones indeterminadas afecten injustificadamente mi honra, dignidad, reputación y ejercicio legítimo de representación.

Las expresiones vertidas no solo resultan incompatibles con los principios mínimos de convivencia institucional, sino que además podrían afectar mi buen nombre, honra, dignidad, reputación y credibilidad en el ejercicio de mi labor de representación y defensa de derechos humanos.

Ninguna persona, independientemente del cargo o función que ejerza dentro de espacios de representación institucional, tiene derecho a realizar afirmaciones infundadas, descalificaciones personales o expresiones orientadas a desacreditar públicamente a otra persona sin sustento objetivo, verificable y legalmente pertinente, más aún cuando dichas expresiones provienen de autoridades que integran el Sistema de Protección de Derechos y que, por tanto, tienen el deber reforzado de actuar con responsabilidad, respeto, ética y apego a los principios de dignidad humana y convivencia institucional.

Resulta especialmente preocupante que este tipo de afirmaciones sean emitidas por una autoridad que ejerce funciones de representación institucional dentro del Sistema de Protección de Derechos, considerando que quienes integran estos espacios tienen el deber de observar principios de respeto, trato adecuado, ética, responsabilidad institucional, objetividad y no afectación a la dignidad de las personas, conforme lo establece el Código de Conducta y Régimen Disciplinario del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ.

En este contexto, corresponde analizar los hechos expuestos a la luz de las disposiciones contenidas en el referido Código, particularmente aquellas relacionadas con:

- el deber de mantener conductas respetuosas hacia los miembros del Consejo de Protección de Derechos;
- la obligación de actuar con ética, objetividad y responsabilidad institucional;
- el respeto a la honra, dignidad y buen nombre de las personas;
- la convivencia adecuada entre integrantes del Sistema de Protección de Derechos;
- y la prohibición de actuaciones o expresiones que generen afectaciones personales o deslegitimación institucional.

De manera particular, respecto de las afirmaciones realizadas por la señora María Verónica Cevallos, en las que menciona a la suscrita junto a la señora Blanca Ortiz y el señor Germán Castillo, señalando que habríamos “caído en la trampa del alcalde” y ocasionado supuestos perjuicios al Consejo de Protección de Derechos, solicito se requiera que dichas afirmaciones sean debidamente aclaradas, individualizadas y sustentadas, precisando los hechos concretos a los que se refiere, la actuación atribuida a cada persona y el eventual perjuicio institucional.

Ello, en razón de que dichas expresiones constituyen afirmaciones descalificadoras respecto del actuar de integrantes del Consejo, sin elementos objetivos que permitan su verificación, pudiendo afectar el buen nombre, la honra y el ejercicio de representación institucional.

Más aún cuando este tipo de expresiones podrían contribuir a generar escenarios de deslegitimación institucional y afectación a la confianza pública respecto del trabajo desarrollado por representantes de grupos de atención prioritaria dentro del Sistema de Protección de Derechos.

Asimismo, debo señalar que la suscrita ya ha sido objeto de expresiones de deslegitimación en una sesión del Pleno por parte de otra consejera, por lo que estos hechos serán igualmente puestos en conocimiento de esta Comisión Disciplinaria para su análisis y la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar, en caso de corresponder, a fin de evitar la reiteración y normalización de este tipo de conductas dentro de los espacios institucionales.

La persistencia de este tipo de conductas no solo afecta a quienes ejercemos labores de representación dentro del Consejo, sino que además genera entornos hostiles y contrarios a los principios que deben regir el Sistema de Protección de Derechos, debilitando la confianza institucional y afectando el ejercicio legítimo de participación ciudadana.

De igual manera, resulta indispensable considerar el contexto en el cual se desarrolla la presente situación, particularmente respecto del proceso de defensa del derecho a la educación inclusiva de un adolescente de 17 años con discapacidad, quien constituye una víctima colateral de las descalificaciones, conflictos y afirmaciones expuestas en el referido audio.

En este sentido, debe observarse el principio del interés superior del adolescente, así como el deber reforzado de protección que corresponde frente a cualquier situación que pueda generar afectaciones indirectas a su entorno familiar, emocional, educativo y de garantía de derechos.

Se deja constancia de que la actuación de la suscrita ha estado orientada exclusivamente a la defensa y promoción de derechos humanos, particularmente en materia de inclusión educativa, participación y protección de personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, dentro del marco constitucional y legal vigente.

En consecuencia, cualquier acusación o señalamiento debe estar debidamente fundamentado y acompañado de prueba objetiva, a fin de evitar que apreciaciones subjetivas o descalificaciones personales afecten mi honra, reputación o ejercicio legítimo de representación.

En este sentido, solicito que los hechos sean analizados bajo un enfoque de derechos humanos, conforme a los principios de dignidad, no discriminación, participación, respeto, interés superior del adolescente y debido proceso, establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

SOLICITUD:

Con base en lo expuesto, se solicita a la Comisión Disciplinaria:

1. Incorporar al expediente el presente oficio, así como el enlace y la transcripción del audio referido, como elementos de análisis dentro del procedimiento correspondiente.
2. Disponer la valoración integral de los hechos expuestos conforme al Código de Conducta y Régimen Disciplinario del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ.
3. Analizar si las expresiones vertidas en el audio podrían constituir conductas incompatibles con los principios de respeto, ética, trato adecuado, convivencia institucional, responsabilidad pública y protección de la dignidad humana.
4. Determinar si las expresiones, descalificaciones y afirmaciones contenidas en el audio podrían constituir incumplimientos a los deberes éticos y de conducta previstos en el Código de Conducta y Régimen Disciplinario del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ.
5. Requerir que las afirmaciones realizadas en contra de la suscrita y de la señora Ángela Guinla sean debidamente individualizadas y sustentadas mediante elementos objetivos, verificables y legalmente pertinentes, en observancia de los principios de veracidad, responsabilidad y debido proceso.
6. Garantizar la protección del buen nombre, honra, dignidad y ejercicio de representación de las personas que participan en espacios institucionales de defensa y promoción de derechos humanos.
7. Garantizar que el análisis del caso se realice bajo un enfoque de derechos humanos, evitando cualquier forma de revictimización, estigmatización o deslegitimación del ejercicio de derechos.
8. Adoptar las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias.

Asimismo, dejo expresa constancia de que el presente oficio se pone en conocimiento de la Presidencia del Pleno y de la Defensoría del Pueblo – Delegación Provincial de Pichincha, para los fines institucionales pertinentes.

ANEXOS

Enlace de audio

Transcripción del audio

Por lo expuesto, reitero mi compromiso con la defensa de los derechos humanos, la transparencia y el respeto al debido proceso.

Atentamente,



Lic. Thanya Patricia Herrera Cortés

Consejera Principal ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ
Representante del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad